

**“REFLEXION Y ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS QUE
INTERVIENEN EN LA PERCEPCION Y REPRESENTACION DE LOS
CIUDADANOS ACERCA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES”**

**CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA
LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL VOTO**

COORDINACION GENERAL:

MTRA. ROSALIA WINOCUR

INVESTIGADOR PARTICIPANTE:

MTRA. LAURA GINGOLD

ASISTENTE DE INVESTIGACION:

LIC. RICARDO RAMIREZ

Diciembre 1996

CONCLUSIONES

La exploración de dinámicas socioculturales regionales tiene particular relevancia en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen la matriz de semejanzas en el conjunto nacional y la visibilidad de los elementos que caracterizan las orientaciones políticas particulares de ciertos actores en áreas geográficas definidas. Las coincidencias entre las culturas políticas del Distrito Federal y del Estado de Querétaro pueden servir como guías para explicar algunas notas características del orden político y describir en parte su estructura profunda. Las diferencias pueden explicarse a partir de las especificidades que adquirió la estructura de poder local y la configuración socio-religiosa en cada espacio regional. Si entendemos la noción de región como unidad socio-cultural inserta en un entramado de múltiples relaciones, necesariamente hay que pensar en términos de un conjunto de fenómenos políticos como históricos y sociales con especificidades propias que participan al mismo tiempo en movimientos de orden más general vinculados a los procesos de conformación del estado-nación en México.

Se suele pensar a la cultura política como una experiencia relativamente homogénea y fija. Lo que las entrevistas en profundidad y otros estudios de corte cualitativo revelan es una dinámica de diferentes lógicas que los sujetos apropian e integran para hacer frente a la complejidad del entorno (sea la gestión de servicios, la elección de un cargo público, las redes de intermediación). "Hibridación" y "mestizaje" son algunos de los conceptos que se utilizan para describir este fenómeno. Lo que estas imágenes sugieren es que la cultura política no es una entidad fija ni homogénea y que en un mismo

grupo social o persona coexisten representaciones y prácticas yuxtapuestas y hasta contradictorias. Esto no refleja necesariamente incoherencia en el pensamiento, sino la convivencia de distintos códigos míticos y operativos que en parte aluden a las prácticas concretas y en parte al conjunto de representaciones sobre las instituciones y procesos políticos.

Tampoco se puede considerar a la cultura política como un comportamiento homogéneo frente al poder, porque en el tejido íntimo de la sociedad coexisten diversas orientaciones sobre las mismas instituciones. De allí la importancia de recuperar el conjunto de prácticas, de representaciones y valores que conforman las diferentes culturas políticas, donde convergen elementos coherentes y contradictorios de diferentes tradiciones, de los medios de comunicación, de las prácticas cotidianas, de los rumores y los mitos, de las memorias individuales y colectivas, de los discursos políticos y religiosos.

Es así que al analizar las culturas políticas de los grupos considerados, vemos que nunca se da una relación de simetría entre los discursos emitidos por el campo político y los receptores de dichos mensajes. Los individuos resignifican en diversas direcciones un mismo mensaje, imponiendo brechas, puntos de fuga y de desvío del sentido de los discursos políticos partidarios. Las culturas políticas son un complejo universo de resignificación, de metabolización y de producción alternativa respecto de los discursos políticos dominantes. En ocasiones pueden ser terreno fértil para ciertos mensajes, alterar su sentido original, en otras ocasiones pueden rechazarlos, o imponerles barreras protectoras de su identidad social.

En la definición de los valores asociados a la cultura política de distintos grupos del Distrito Federal, la coexistencia de lo moderno y lo tradicional, lo sacro y lo secular es un dato significativo que da cuenta de la dificultad de asumir que el sentido de las "representaciones" democráticas (como los conceptos de democracia, transición política, legitimidad) sean unívocos y universales.

A lo largo del estudio, encontramos evidencia de los profundos quiebres en la percepción del sistema político entre diferentes grupos, que permite cuestionar los prejuicios referidos a una supuesta cultura política de transición que acompañaría a la transición política, en el sentido que estaría evolucionando unidireccionalmente de valores tradicionales hacia valores modernos.

Resulta más conveniente hablar de una cultura política de intersección o imbricación de valores modernos y tradicionales, que de una cultura política de transición. Lo que proponemos es no pensar lo tradicional como oposición de lo moderno, sino entender ambas formas como un proceso de imbricación que funciona operativa e ideológicamente con estrategias y recursos combinados en la relación con el sistema político y la gestión ante la administración pública.

Esta imbricación, en términos de prácticas cotidianas, tiene significados distintos de acuerdo a la pertenencia a grupos sociales y culturales diferenciados.

En esa lógica, los sujetos desarrollan prácticas donde se mezcla de manera compleja el conocimiento del marco legal con prácticas informales para la gestión y obtención de recursos. Es en esta tensión que se crea entre lo formalmente instituido con lo informalmente legitimado, donde se construye la percepción de lo público.

De allí que frente a la misma pregunta, por ejemplo, sobre las cualidades de un buen político, encontraremos diferentes respuestas que apuntan a diferentes lógicas y entendimiento de la política. A pesar de que ser democrático es la cualidad principal valorada, lo democrático no necesariamente se asocia con los valores clásicos, sino a cualidades de orden moral. Asimismo la honestidad y las cualidades morales se refieren al ejercicio de la función pública más que al desempeño personal del líder.

La diferencia entre estos dos aspectos es importante en tanto el primero se refiere al comportamiento político y el segundo al moral y estarían expresando dos tipos de demandas sociales: una tecnocrática y otra moralizante. El carisma y el don de mando es mencionado por quienes tienen mayor instrucción; mientras que la cualidad de democrático se reiteró en quienes tienen una nivel inferior a la universidad.

Como la otra cara de la moneda, en la definición de los cualidades negativas de un político, existe una tendencia a aumentar la identificación del mal político con la antidemocracia conforme aumenta la escolaridad. Esta tendencia es coherente con la visión tecnocrática de la política de los grupos más instruidos, quienes tienden a enfatizar en los rasgos de eficiencia más que en los

morales como la honestidad (o su contracara, la corrupción). Mientras que los entrevistados con un nivel de instrucción inferior a la universidad subrayaron como característica de un mal líder el incumplimiento de promesas y la deshonestidad.

Lo anterior nos lleva a reflexionar en la necesidad de avanzar no sólo en el estudio de las diferencias entre las culturas políticas de distintos grupos, sino en la comprensión de los sentidos asociados a los discursos y conceptos que todos reconocen pero son incorporados con significados diferentes. Por ejemplo, en la concepción de ciudadanía, llama la atención que todos los entrevistados - independientemente de su origen y condición social-, no manifestaron extrañeza, dudas o dificultad para definir el concepto, lo cual muestra familiaridad y apropiación del término. Sin embargo, lo que varió notablemente fueron los parámetros para definirlo, mientras para algunos está asociado con reglas de convivencia en un espacio territorial o simbólico amplio como "el país", "la nación", o "la sociedad"; para otros se relaciona con códigos de solidaridad, organización y apoyo mutuo para la resolución de problemas comunitarios en el ámbito más restringido del barrio, la colonia o la comunidad; y un tercer grupo lo asoció con el cumplimiento de deberes y derechos civiles y políticos en el sentido más clásico del término. De ese modo, la noción de ciudadanía tiene distintos sentidos según quién sea el "ciudadano".

Otra mención la merecen la dificultad para algunos de definir la representación de la "transición a la democracia". Un número elevado de entrevistados no asocia este fenómeno con cambios políticos, sino con avances o retrocesos económicos, o con procesos de modernización entendida como progreso. Dos ideas destacan la aparente falta de comprensión del concepto: la de

tránsito asociada a evolución o progreso; y la de cumplimiento o no de promesas sustantivas.

Otro aspecto importante que revela la investigación, es la dificultad de encuadrar al régimen político dentro de una fórmula conocida otorgándole un carácter excepcional por único e irrepetible que constituye unos de los principales elementos míticos en lo que descansa la legitimidad del sistema político. Esto es particularmente evidente en las explicaciones dadas para justificar la definición de "mezcla" (autoritario y democrático al mismo tiempo), que caracterizan lo que se percibe como una realidad política "única", a la "mexicana", sin posibilidades de comparación con otras latitudes. Asimismo, la definición de régimen como "mezcla" no implica una valoración negativa; más bien significa es que el gobierno en algunas circunstancias debe ser autoritario.

En el caso de Querétaro, la definición mayoritaria del régimen como democrático, en muchos no casos no respondió a los significados clásicos, sino que se lo explicó como un rasgo positivo asociado a códigos morales; reglas de urbanismo; seguridad pública; y virtudes personales. Por su parte, la definición de autoritario también puede significar firmeza en el poder, don de mando o combate a la corrupción.

La universidad es un componente importante en la adquisición de valores y nociones democráticas. Distintos indicios nos permiten llegar a esta conclusión: casi el 70% de los que opinaron que el régimen era democrático no accedieron a la universidad y por su parte sólo el 31% de los que tienen estudios superiores caracterizó al régimen como democrático. En este sentido, la

universidad constituye un ámbito de socialización política privilegiado y un factor determinante en el cuestionamiento del sistema político.

El estudio muestra que la percepción del régimen está mediada fuertemente por el nivel de impacto que generan los cambios políticos en la vida cotidiana. Si las reformas y/o alteraciones del orden político no provocan sucesos que impidan el acceso a los recursos, las formas de sociabilidad, o trastocan los códigos de convivencia y las formas de sociabilidad; difícilmente cambiará la representación del régimen político. En este sentido, a diferencia de otras realidades nacionales como las dictaduras latinoamericanas en la década de los ochenta; en México, la caracterización del régimen como "autoritario" no surge a partir de alteraciones violentas del orden cotidiano, sino de un cuestionamiento ideológico que en algunos casos surge de la universidad; y en otros, de experiencias conflictivas con la autoridad localizadas en grupos particulares, como por ejemplo los vendedores ambulantes.

En relación al problema de términos como democracia, fraude, transición, etc, que todos reconocen, pero se apropian y usan con significados diferentes, plantea no sólo una cuestión de marketing político, sino también la necesidad de repensar los procesos de decodificación de los discursos políticos y de las campañas electorales.

Por ejemplo, la sospecha generalizada de fraude, particularmente entre aquellos que no pasaron por la universidad, no sólo denota irregularidades en los procesos electorales sino un sentimiento de "estafa" vinculado a la creciente insatisfacción de necesidades básicas como empleo, vivienda, y servicios. Por el

contrario, entre los de mayor instrucción la palabra fraude se refiere casi exclusivamente a las irregularidades y delitos electorales.

La variación en la percepción de fraude es sumamente significativa no sólo entre una elección y otra - para 1988 casi la mitad opina que hubo fraude, mientras que en 1991 son poco menos de la cuarta parte-; sino fundamentalmente entre la creencia general y en abstracto de que si se hace fraude en México, y la más baja para una elección en particular (1988 y 1991); y la notablemente inferior para la elección de 1994. La primera percepción remite más a la creencia generalizada de que se hace fraude en México, con toda la carga de estigmatización que la suposición de este ilícito conlleva, por el contrario las otras estimaciones aluden más a la experiencia concreta.

La sospecha de fraude alcanza casi el 80%, sin embargo, sólo la mitad afirmó tener conocimiento de este ilícito. Esto muestra un gran deterioro de la credibilidad electoral pues aun sin tener referencias concretas se asume la existencia de irregularidades en el proceso. Este deterioro es particularmente alarmante porque se vincula directamente a la "política", como rasgo endémico del sistema.

La corrupción de la política está asociada en un plano, a la oscuridad de los procedimientos y, en otro nivel, a la identidad del mexicano. Existe una ambigüedad respecto a la percepción sobre la naturaleza del fraude, la cultura mexicana y las expectativas de cambio. La creencia de un 80% de los entrevistados respecto a que se hace fraude en las elecciones imaginariamente se

asocia la identidad y la cultura mexicana: *“por algo tenemos a los políticos que tenemos” “por algo tenemos un partido en el poder por más de 60 años”*.

Sin embargo, si bien se reconoce a la corrupción o al fraude como parte de la propia naturaleza del mexicano, está presente también la posibilidad de ser diferentes, que se expresa en altas expectativas de cambio para la elección del 94. Esto se relaciona con las propias definiciones del "ser mexicano" : *“Yo diría que somos muy ambiguos mezclados con la inocencia”; “muy contradictorios, con muy poca conciencia civil, acostumbrados a que nos hablen en un doble discurso”*.

La ambigüedad estuvo presente incluso en la selección de las cualidades: algunos mencionaron al *“macho mexicano”*; y otros que *“somos un país de agachones”*; que somos *“muy formales”*; pero también *“muy relajientos”*; que *“somos muy tolerantes”*; pero también *“muy violentos”*; *“nos gusta mucho la libertad, pero también sabemos ser esclavos”*; *“que somos flojos pero cuando es necesario nos podemos organizar y hacer las cosas bien”*; *“que somos apáticos, pero que somos gente que puede salir adelante en cuanto quiera”*.

En el mismo sentido, se puede afirmar que cuanto más distante (espacial y temporal) es el hecho fraudulento respecto a la experiencia del entrevistado, se vive como un dato incuestionable. En contraste, cuando se pregunta por una experiencia concreta (incluso de los actos electorales) la percepción del fraude disminuye notoriamente. Esto se relaciona con el componente mítico de la creencia que asocia fraude con la identidad del ser nacional, lo cual introduce una

disociación entre la experiencia concreta y sus referentes en el plano de la representación.

Asimismo, el fraude no es un causal de deslegitimación del régimen político. Además de ser entendido como un acto en contradicción con la ley, puede ser analizado como un fenómeno permitido y estimulado por otros sistemas de reglas formales e informales, públicas y privadas, que coexisten con las normas prescriptivas. De manera informal, la regla que ordena la eficiencia - medida en términos de la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, empleo y servicios-, es tan fuerte que permite legitimar el fraude.

En esa dirección es interesante destacar como la certeza de que se hizo fraude en las elecciones de 1988 no afectó la imagen del gobierno del ex-Presidente Salinas. Esto evidencia que la legitimidad del gobierno no depende necesariamente de las condiciones en que accedió al poder.

La mayor sospecha de fraude para las elecciones se concentra por una parte entre los más jóvenes, y por la otra entre los de mayor edad. Curiosamente representan los que tienen menor y mayor experiencia con el sistema político. Quienes tienen una larga experiencia con el sistema político se han vuelto pesimistas frente a la posibilidad de cambio, en ese sentido tienden a interpretar las reformas políticas como nuevos estilos para referirse a lo mismo: "se cambia para que nada cambie". Sin embargo, el descrédito de los jóvenes responde a una lógica diferente, vinculada no sólo a la desconfianza en los procedimientos electorales, sino a una inserción problemática en la sociedad como consecuencia de procesos globales como la fragmentación de las identidades políticas y

sociales; la dificultad de inserción en el mercado laboral; y el desfase entre preparación académica y oportunidades de trabajo; y el sentimiento generalizado de un fin de milenio apocalíptico.

Al tener en cuenta la escolaridad, se repite la tendencia que la mayor percepción del fraude se encuentra entre los que tienen mayor escolaridad: los universitarios y los de posgrado. Esta tendencia se refleja en que la mayor desconfianza hacia los procedimientos electorales se encuentra en los niveles universitarios, en los profesionales y los intelectuales. Así como en la definición de los políticos mexicanos, los casos extremos son los de los estudiantes universitarios que en un 100% identificaron a los políticos con la corrupción.

Relacionado con lo anterior, el estudio también evidencia que la legitimidad de los procesos políticos o del régimen no se fincan en el orden electoral, sino en la eficiencia de la gestión pública. En Querétaro, la evolución de las preferencias electorales a favor del PRI, en muchos casos responde al prestigio personal del Gobernador Burgos sustentado en códigos locales de evaluación de lo que es un buen gobernante y de su gestión pública. En este caso la trayectoria personal y familiar del gobernador, incluso la manifestación pública de sus preferencias religiosas (todos los domingos el gobernador concurre a misa con su familia y saluda a todos los parroquianos), garantizarían mejor que cualquier otro elemento la honestidad y eficiencia de la gestión. En ese contexto se comprende mejor que entre las razones dadas para votar por un determinado partido destaquen las cualidades del candidato.

Asimismo resulta llamativo que sólo el 8% del total de entrevistados mencionó el voto como una condición necesaria de acceso a la democracia. La omisión resulta particularmente llamativa si pensamos que el estudio se realizó en pleno clima pre-electoral y la apelación al sufragio como mecanismo de participación y afirmación de la democracia era una constante en el discurso de los partidos políticos y también en la propaganda oficial. Una probable interpretación de este fenómeno que en condiciones de muy baja institucionalidad del sufragio, la insistencia y el bombardeo de información provoca un vaciamiento de sentido asociado a la percepción de una lógica perversa y corrupta del poder, en el sentido de que nadie tiene autoridad y legitimidad para garantizar la limpieza de las elecciones.

Finalmente, llama la atención la baja institucionalidad del acto electoral en los distintos grupos de ciudadanos. Distintos indicios nos permiten arribar a esta conclusión: por una parte, el voto no es considerado como obligatorio por un alto porcentaje de entrevistados (y aquí no se diferenciaron los de mayor instrucción). En parte, esto podría explicarse por la ambigüedad de la legislación mexicana que establece la obligatoriedad del voto pero no señala sanciones por no votar; pero, en otro nivel, es un indicador de la falta de institucionalidad, en el sentido de experimentar la obligación ciudadana, independientemente de lo que establezca la legislación.

Relacionado con lo anterior, consideramos que el aumento de votantes en la última elección con respecto a las precedentes, no se vincula tanto con la revalorización del sufragio como mecanismo fundamental de participación, sino más bien con la campaña de credencialización. La eficacia de la credencial está

depositada en la fotografía como elemento simbólico de identidad. No solo porque permite comprobar la identidad de una persona en el momento de votar, - y desde esta perspectiva se vuelve particularmente valiosa para reforzar la credibilidad del sufragio-, sino que representa al mismo tiempo una carta legal de presentación y el comprobante de pertenencia a una comunidad de derechos.

Aunque casi el 80% señaló como mecanismo para escoger a los líderes políticos el sufragio universal y secreto, esto no implica comprensión de la validez de este mecanismo como garantía de alternancia en el poder, sino que en muchos casos significa el simple reconocimiento de un ritual sexenal asociado al partido en el poder.

En el mismo sentido, los mecanismos de sucesión presidencial son percibidos como un ritual que se renueva cada sexenio, cuya eficacia social reside en el carácter público del dispositivo secreto. Es decir, el hecho de que todos sepan que la designación del sucesor ocurre bajo reglas no escritas y controladas por una sola persona garantiza la continuidad del ritual.

Otro dato interesante que surgió del análisis, es la falta de visibilidad de un sistema de partidos. Los partidos políticos de oposición se definen por identificación o por oposición al PRI. En ese sentido, no se perciben reglas claras de funcionamiento que sean válidas para todos los partidos, independientemente de sus diferencias ideológicas.

El PRI, más que partido político, constituye un referente permanente para definir -de forma negativa o positiva- las relaciones del conjunto de la sociedad

con el sistema político, y esta representación afecta la imagen de los partidos políticos de oposición y de sus mecanismos de funcionamiento. Si la cultura nacional está asociada al poder político, diferenciarse es renunciar a la cultura nacional. Como paradoja para la oposición, ser oposición implica no “representar” al mexicano, y no poder apropiarse de los mitos revolucionarios o por el contrario asemejarse al PRI y no tener símbolos identificatorios propios. Otro síntoma de la dificultad de percibir a la oposición con identidad propia, es que tanto los "buenos" como los "malos" políticos fueron señalados mayoritariamente como pertenecientes al PRI.

Si bien, muchos de los entrevistados ven con "simpatía" la posibilidad de la alternancia, al mismo tiempo les produce miedo e incredulidad. Entre las razones aducidas, aparecen el temor a la falta de experiencia para gobernar de los partidos de oposición y la incredulidad de que el PRI se resigne a "perder". Ambas razones explicarían la percepción de caos, que algunos definen como "guerra". En ese sentido la "simpatía" por la alternancia se relativiza ante la posibilidad de que ésta amenace la paz social. Lo paradójico de esta situación reside en que se espera que la oposición adquiera experiencia de gobierno antes de asumir el poder. Dado que en los últimos sesenta y cinco años la única experiencia de gobierno que tiene la sociedad es con el PRI, lo que se espera de los partidos de oposición es que se parezcan "un poco" al PRI para poder confiar en ellos como alternativa de poder.

El temor asociado al sentimiento difuso de la ruptura del orden, constituye un problema político, al generar una relación perversa entre el deseo de orden y cambio (alternancia) y la amenaza de caos. Se identifica el “orden” con el orden

establecido y el caos con el cambio, cualquiera sea su signo. En este sentido, la simpatía por la alternancia se relativiza ante la amenaza de la pérdida de la certidumbre.

En conclusión, el análisis acerca de los elementos que intervienen en la percepción, representación y valorización de los ciudadanos sobre las instituciones políticas y procedimientos electorales; permite identificar distintos grupos críticos hacia los que habría que orientar los contenidos de la campaña de promoción del voto:

Al considerar las variables ocupación y escolaridad:

a.- Un grupo con visiones tecnocráticas y racionales de la política, que creen y confían en las virtudes de la reforma electoral y una mayor participación civil, integrado por intelectuales, periodistas, académicos, militares, estudiantes, profesionistas y cierto sector de empresarios.

b.- Otro grupo con una visión corrupta de la política, con una fuerte carga negativa que involucra a los políticos, el gobierno, las instituciones, los procedimientos y los procesos electorales, que reúne a empleados del sector público y privado, amas de casa de clase media y alta, profesionistas y empresarios.

c.- Un tercer grupo, que manifiestan actitudes de indiferencia y apatía; poseen una percepción indiferenciada de la política, de la identidad del mexicano, y del estado. Tienen una visión pesimista, porque viven el ejercicio fraudulento

de la política como parte del ser mexicano y endémica a su naturaleza y en ese sentido muy difícil de cambiar. Esta representado principalmente por los que trabajan en el sector informal de la economía, las amas de casa de clase baja, y los empleados de vialidad.

Al considerar la variable edad encontramos fundamentalmente tres grupos significativos:

a.- Los jóvenes entre los 18 y los 25 años: Se caracterizan por su apatía, que no sólo es producto de una mayor desconfianza hacia las instituciones y procesos políticos, sino que es sintomática de una inserción problemática en la sociedad, vinculada a los procesos de fragmentación política, a la crisis de identidad, a la dificultad de inserción en el mercado laboral, y al desfase entre la preparación y las oportunidades de trabajo.

b.- Los adultos entre 26 y 45 años: Se caracterizan por compartir visiones tecnocráticas y moralizantes de la política.

c.- Los adultos de 50 en adelante: Se caracterizan por mostrar una actitud de apatía, descreimiento y desconfianza hacia los procesos electorales, pero, a diferencia de los jóvenes, ésta se explica por su larga experiencia con el sistema político, que los ha vuelto pesimistas frente a la posibilidad de cambio.

Al tener en cuenta la variable sexo destaca:

a.- Las mujeres tienen una visión más moralizante de la política, pero también más confiada y mediada por prácticas cotidianas, particularmente por la gestión y el uso de los servicios y la participación comunitaria. Y también confunden más a menudo los contenidos de los derechos civiles y políticos y son las que expresan una mayor variedad de sentidos asociados a los conceptos clásicos.

b.- Los hombres son más escépticos, desconfiados, racionales y legalistas frente al ejercicio de la política. Y son menos resistentes frente a la posibilidad del cambio, particularmente la alternancia en el poder.

PROPUESTAS PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL VOTO

Considerando los resultados del análisis, y los grupos caracterizados como destinatarios, la campaña de promoción del voto debería contemplar cuatro ejes fundamentales, que no deben manejarse como contrapuestos sino simultáneos porque se dirigen a distintos públicos:

1.- El voto como mecanismo de afirmación de identidad:

La campaña de credencialización puede impactar positivamente la campaña de promoción del voto, si además de contemplar aspectos instrumentales (necesaria para trámites de todo tipo); y coercitivos (si no posee la credencial no puede realizar ningún tipo de gestión ante dependencias públicas o privadas); apunta a reforzar el uso y posesión de la credencial como un mecanismo de afirmación de identidad; de presentación personal; de acceso a vías más formales de consecución de recursos; y de legalidad. En síntesis, el mensaje debe presentar todas estas prerrogativas no sólo como ventajas instrumentales, sino como productoras de sentido de pertenencia a una comunidad de derechos y obligaciones institucionalizadas.

2.- El voto como un acto de moralización social:

La campaña debe recuperar y revalorizar, por una parte la importancia de la participación ciudadana como única garantía de la limpieza de las elecciones, de la transparencia de los procedimientos electorales y control de la actuación de los líderes y partidos políticos, de las instituciones políticas y

de los medios de comunicación; y por otra, el sufragio como un acto individual, pero de alcance e impacto social, de moralización cívica y combate a la corrupción: "si me abstengo de participar contribuyo a que continúe el fraude y la corrupción y que unos pocos sigan decidiendo impunemente por mí".

Esto implica, desde el punto de vista publicitario, crear un discurso que le devuelva la responsabilidad de sus actos al ciudadano, de modo de que las instituciones dejen de representar una "fractura" donde se deposite lo "bueno" y lo "malo" del sistema político y del carácter nacional.

3.- El voto como instrumento de cambio:

La campaña debería contemplar y recuperar los elementos de ambigüedad presentes en la definición del ser mexicano: *Somos corruptos, flojos, cómplices del sistema, pachangeros, superficiales, informales, impuntuales, conformistas, un país de agachones, relajientos, apáticos...pero también podemos ser responsables, solidarios, trabajadores, exigentes, un país que puede salir adelante cuando quiere.* Lo que queremos decir es que si bien se reconoce a la corrupción o al fraude -así como los otros valores negativos- como parte de la naturaleza del mexicano, está presente la posibilidad de ser diferentes. En esa perspectiva la campaña debería poner el acento en que el voto puede constituir un mecanismo personal, individual, de apuesta por los valores positivos del mexicano.

4.- El IFE como garante y mediador:

El IFE debe aparecer en la campaña evitando reflejar funciones de control, por el contrario debe reforzar su rol de garante y mediador entre las distintas instancias comprometidas en los procesos y procedimientos electorales; y la sociedad civil, con el objetivo de romper la representación perversa del poder donde nunca queda claro "quien controla al controlador".